

**CONSTANCIA SECRETARIAL.** Medellín, 22 de abril de 2021. Se realiza llamada al número celular 322.263.73.13, se entabla conversación con el accionante señor OSCAR ANDRÉS ACEVEDO CALLE, quien luego de comentarle el motivo de llamada indica que de manera efectiva recibió por parte del accionado un correo el día 19 de marzo con la correspondiente autorización dirigida a Colfondos para el retiro de cesantías, sin embargo, solo le fue pagada las cesantías correspondientes al año 2019, faltando las del año 2020. Ahora, una vez interpuesta la presente acción, recibió por parte de la Alcaldía de Briceño varios correos con la información referente a la liquidación, sin embargo, al presentar varias inconsistencias se encuentra en trámite de revisión, y él se encuentra a la espera del envío de la liquidación correcta y definitiva, y del correspondiente pago.

Se le solicita que envíe de forma organizada los correos enviados por la Alcaldía de Briceño, tanto el día 19 de marzo de 2021, como los posteriores a la presentación de esta acción constitucional.

Diana Carolina Peláez Gutiérrez

Secretaria

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO DECIMOSEXTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD**

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

<b>Proceso</b>	Tutela No. 088
<b>Accionante</b>	Oscar Andrés Acevedo Calle
<b>Accionado</b>	Alcaldía De Briceño
<b>Vinculados</b>	AFP Colfondos
<b>Radicado</b>	05001 40 03 016 <b>2021 00424 00</b>
<b>Instancia</b>	Primera
<b>Providencia</b>	Sentencia No. 097 de 2021
<b>Decisión</b>	Niega Tutela

Procede el despacho a resolver la acción de tutela interpuesta entre las partes de la referencia, con fundamento en el artículo 86 de nuestra Carta Política, Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

## **1. Pretensión.**

Solicita el accionante, se le proteja el Derecho fundamental de Petición, los cuales considera vulnerados por la accionada, al no ofrecer una respuesta de fondo, clara y precisa.

## **2. Hechos.**

Explica el accionante señor Oscar Andrés Acevedo Calle que trabajo para la Alcaldía de Briceño durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, en el cargo de Jefe de Control Interno.

El pasado 11 de marzo de 2021, elevo derecho de petición ante la entidad, solicitando: *"...ordenar a quien corresponda el pago de la liquidación de servicios y la resolución para reclamar las cesantías en el fondo (COLFONDOS)..."*.

Sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuestas.

La falta de respuesta lo tiene perjudicado, toda vez que no ha podido reclamar las cesantías por no contar con lo justamente solicitado.

## **3. Respuesta parte accionada**

### **3.1. ALCALDÍA DE BRICEÑO**

Notificada en debida forma, allega pronunciamiento indicando que al accionante no se le adeuda ningún factor salarial o prestacional, de modo tal que en los días posteriores a su renuncia se cancelaron la totalidad de los salarios y prestaciones laborales adeudadas.

Así mismo, el día 11 de marzo del año en curso, vía correo electrónico se recibió solicitud para la liquidación de servicios y especialmente, la autorización para reclamar las cesantías consignadas en Colfondos.

El día 24 de marzo, se recibió comunicación vía correo electrónico por parte de Colfondos, a través de la cual solicitaba autorización para realizar el pago de cesantías "por terminación de contrato del afiliado", según informo la entidad, se inmediato se impartió la correspondiente confirmación.

Se consulto con la misma entidad Colfondos a la línea de servicios, e informaron que la cuenta fue cancelada por el titular, el día 24 de marzo de 2021; lo que hace suponer que ya las cesantías fueron cobradas por el accionante.

Se resolvió en los términos definidos por el art. 14 de la ley 1437 de 2011, la solicitud de accionante.

### **3.2. AFP COLFNDOS SA**

Indica que se presenta falta de legitimación por pasiva, toda vez se evidencia que no es Colfondos S.A. el accionando; el señor Acevedo nunca ha sido empleado de esa administradora; por lo que no resulta procedente trámite en contra de Colfondos S.A.

## **IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.**

### **4.1. Competencia.**

Se asume el conocimiento de la acción de tutela por mandato constitucional (artículo 86), en armonía con el decreto 2591 de 1991, ya que los hechos denunciados por quien acciona, al parecer resultan ser constitutivos de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, mientras que la parte accionada, sería la generadora de aquellos eventos y a su vez destinataria de los efectos de la decisión conforme el artículo 42, ibídem.

### **4.2. Problema jurídico.**

Corresponde a este Despacho resolver si la ALCALDÍA DE BRICEÑO, ha vulnerado el derecho fundamental de petición a la parte accionante al no dar una respuesta a un derecho de petición radicado el 11 de marzo de 2021.

### **4.3. Sobre el derecho de petición**

El derecho fundamental alegado como vulnerado al tenor del texto constitucional es el derecho de petición, de allí que sea menester recordar algunos aspectos relevantes en torno a esa figura jurídica.

Respecto del derecho de petición indica el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia:

*"...Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."*

Por su parte, el Art. 6° del C. C. A., hoy Art. 14 de la Ley 1437 de 2011, señala que, *"salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción"*. En su párrafo indica que cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado de manera inmediata y antes del vencimiento del término expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha (que sea razonable) en que se resolverá o dará respuesta, tiempo que no podrá ser superior al doble del inicialmente previsto.

Sea del caso traer a colación apartes de la Sentencia T-236 de 2005 en la cual se reitera la extensa jurisprudencia que sobre la materia ha sentado la Corte Constitucional y que igualmente aplica a la nueva normativa:

Reiteradamente la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición en su contenido<sup>1</sup> comprende los siguientes elementos<sup>2</sup>: i.) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas (núcleo esencial)<sup>3</sup>; ii.) Una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y iv.) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido".

Sobre este último punto vale recordar que dicha Corporación se encargó de diferenciar claramente el derecho de petición y el derecho a lo pedido cuyos conceptos, aunque diversos, suelen confundirse frecuentemente. Los criterios

---

<sup>1</sup> Ver entre otras las sentencias T-220 de 1994; T-515 de 1995; T-309 de 2000; C-504 de 2004; T-892, T-952 y T-957 de 2004.

<sup>2</sup> Ver sentencias T-944 de 1999 y T-447 de 2003. En la sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, retomada recientemente por las sentencias T-855 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-734 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-915 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras, se delinearón algunos supuestos fácticos mínimos del derecho de petición, que han sido precisados en la jurisprudencia de esta Corporación, mediante sus diferentes Salas de Revisión.

<sup>3</sup> Es abundante la jurisprudencia existente sobre el núcleo esencial del derecho de petición. Se pueden consultar, entre las más recientes las siguientes: T-091, T-099, T-143, T-144, T-144 y T-1099 de 2004.

que desde sus inicios fijó el Tribunal Constitucional, en Sentencia T-242 de 1993, para efectos de establecer esas diferencias se transcriben a continuación:

“(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)”.

## **5. Análisis del caso.**

El Despacho entra a examinar si la situación fáctica planteada en la acción de tutela interpuesta configura o no una violación al Derecho Fundamental de Petición.

En consecuencia, resulta procedente preliminarmente establecer un juicio de procedibilidad de la acción de tutela de cara a lo petitionado, para lo cual es preciso recordar que en materia de derecho de petición ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T 451 de 2017 “La **jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela**, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. En tal sentido, quien encuentre que la respuesta a su derecho de petición no fue producida en debida forma, ni comunicada dentro de los términos que la ley señala, y que en esa medida vea afectada esta garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.”- Negrilla fuera de texto-

De allí que sí resulte procedente la acción de tutela para amparar la pretensión solicitada.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela frente a la entidad accionada, es preciso entrar a analizar los elementos del derecho de petición establecidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-081 de 2007, mismos que obedecen al núcleo esencial del Derecho de Petición, así:

**(i) La posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas:** Referente a este punto se desprende del acervo probatorio que la parte accionante efectivamente tuvo la posibilidad de hacer uso de su derecho fundamental de petición, puesto que presentó solicitud ante el ALCALDÍA DE BRICEÑO, desde 11 de marzo de 2021 (PDF No. 04 y 05 del expediente digital), mediante la cual solicitó:

*"Me dirijo a usted por este medio solicitando su colaboración según la referencia, por favor ordenar a quien corresponda el pago de la liquidación de servicios y la resolución para reclamar las cesantías en el fondo (COLFONDOS) a que tengo derecho por haber laborado en la entidad que usted representa, como jefe oficina asesora de control interno desde el 25 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020"*

**(ii) La facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico.** En este sentido, debe tenerse en cuenta los términos para resolver el derecho de petición que preceptúa el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:

***"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.*** Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos*

*documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

***Parágrafo.*** *Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*

No obstante lo anterior, en el marco de la pandemia mundial del COVID-19, del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado a través del Decreto 417 de 2020, se da la medida de aislamiento preventivo obligatorio adoptado a través de decretos ordinarios, y con el objeto de tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, se expidió el Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas.

Dentro de esas medidas adoptadas, el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, establece la ampliación de términos para la atención de los derechos de petición que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

***Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.***

*Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*

*(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.*

Así las cosas, en el presente caso la petición que interesa, corresponde a las peticiones que tienen un término de 30 días para recibir respuesta, y fue presentada el día **11 de marzo de 2021**, es decir, en el curso de la entrada en vigencia de la Emergencia Sanitaria, dado que tal emergencia mediante Resolución 000222 de 2021 se prorrogó tal emergencia hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que al momento de presentarse la acción constitucional 14 de abril de 2021, el término de 30 aún no había expirado; **siendo la fecha límite para brindar respuesta el día 30 de abril de 2021.**

Por lo que no puede predicarse una vulneración al derecho fundamental de petición para el momento de alegarse tal conculcación, esto es al momento de presentación de la acción de tutela, pues para aquél entonces la accionada aún estaba en término de responder su petición, incluso lo está, para la fecha de este fallo.

De esta guisa, no se presenta vulneración alguna al Derecho de Petición, toda vez que la entidad accionada, para la fecha de interponerse la presente acción constitucional, se encontraba aún en término para brindar una respuesta oportuna, de allí que se pueda inferir que no existe vulneración ius fundamental, pues no se puede pasar por alto que la teleología de la acción constitucional en comento estriba en la garantía de derechos de raigambre fundamental que se vean lesionados ante alguna acción u omisión, por lo que se trata de un mecanismo y garantía que la constitución le otorga a toda persona para acudir ante un juez en defensa de sus derechos fundamentales, siendo un instrumento autónomo, subsidiario y de aplicación inmediata para la protección de éstos, cuando quiera que sean violados o amenazados por una autoridad pública, o por personas privadas en algunos casos específicos previstos por el legislador, cuando el afectado se halle en estado de indefensión frente al trasgresor, por conductas activas u omisivas con las que se viole o ponga en peligro aquellos derechos fundamentales, y para el caso de marras, no existió para la fecha de radicación de la acción, lesión al derecho fundamental de petición toda vez que los términos de respuesta no han vencido.

Sin embargo, teniendo presente la proximidad del vencimiento del término para responder la petición, se exhortará a la tutelada para acatar el cumplimiento de los términos para dar resolución a los derechos de petición que se radiquen en dicha dependencia, en especial el del señor OSCAR ANDRÉS ACEVEDO CALLE



### III. CONCLUSIÓN

Consecuente con lo expuesto el **JUZGADO DECIMO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política,

### FALLA

**PRIMERO. NEGAR** el amparo constitucional deprecado por el señor **OSCAR ANDRÉS ACEVEDO CALLE**, y en contra de la **ALCALDÍA DE BRICEÑO**.

**SEGUNDO. Exhortar** a la **ALCALDÍA DE BRICEÑO**, a fin de acatar el cumplimiento de los términos para dar resolución a los derechos de petición que se radiquen en dicha dependencia, en especial el del señor **OSCAR ANDRÉS ACEVEDO CALLE**.

**TERCERO.** Notificar este proveído a las partes, por el medio más expedito posible y en especial a la parte accionante.

**CUARTO.** Advertir a las partes que contra la presente decisión procede el recurso de impugnación ante los Jueces Civiles del Circuito de Oralidad de Medellín.

**QUINTO.** Remitir para su eventual revisión el expediente a la Honorable Corte Constitucional, si este proveído no fuere impugnado oportunamente, (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

### NOTIFÍQUESE

**Firma Electrónica**

**MARLENY ANDREA RESTREPO SÁNCHEZ**

**JUEZ**

**Firmado Por:**

**MARLENY ANDREA RESTREPO SANCHEZ**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 016 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE  
MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**5b7d5621a2fb446a670816fcf902d0fffdea88961b781f7952b6c3b9e0  
02e08c**

Documento generado en 27/04/2021 03:44:52 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**